



“Al servicio de la Justicia y de la Paz Social”

TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN
SALA TERCERA DE DECISIÓN CIVIL

MAGISTRADA PONENTE
ALBA LUCIA GOYENECHE GUEVARA

Medellín, veintiséis de julio de dos mil veintitrés.

Radicación No.	05001-31-03-012-2018-00529-01
Proceso	Ejecutivo
Demandante	Cooperativa Playeros de Guatapé “Cooplayeros”
Demandado	Rodimiro Tangarife Cifuentes
Procedencia	Juzgado Doce Civil del Circuito de Medellín
Decisión	Confirma la sentencia apelada.
Síntesis	Carta de instrucciones. En ausencia de manifestación expresa del deudor en cuanto a las instrucciones para llenar los espacios en blanco, el título debe ser completado conforme a los términos en que se obligó el deudor, de acuerdo con las particularidades que rodearon el negocio que lo originó.
Aprobación	Proyecto aprobado en sesión virtual del día 26 de julio de 2023.
Rdo. Interno	110-19
Sentencia nº	037-23

Conoce la Sala del recurso de APELACIÓN interpuesto por la parte demandante, frente a la sentencia proferida por el JUZGADO DOCE CIVIL DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN, en audiencia celebrada el 26 de julio de 2019, dentro del proceso EJECUTIVO SINGULAR instaurado por la COOPERATIVA PLAYEROS DE GUATAPÉ “COOPLAYEROS”, en contra del señor RODIMIRO TANGARIFE CIFUENTES.

1. ANTECEDENTES

1.1. HECHOS Y PRETENSIONES DE LA DEMANDA.

La COOPERATIVA PLAYEROS DE GUATAPÉ, por intermedio de apoderado judicial, formuló demanda ejecutiva en contra del señor RODIMIRO TANGARIFE

CIFUENTES, con fundamento en los siguientes supuestos fácticos (Fol. 1 a 5 y 9 a 12, Cdno. Ppal):

El demandado giró una letra de cambio a favor de la cooperativa demandante, el 27 de diciembre de 2017, obligándose a pagarle la suma de \$203.398.160 el 02 de enero de 2018.

La obligación se encuentra vencida, sin que el demandado haya cancelado el monto adeudado, a pesar de los requerimientos efectuados, lo que hace la obligación exigible, y genera intereses moratorios a partir del día siguiente a la fecha de vencimiento hasta el pago total, a la tasa equivalente a una y media veces el interés bancario corriente, dado que no fue pactada dicha tasa por las partes.

Con fundamento en lo anterior, solicitó que se librara mandamiento a su favor y en contra del deudor por la suma de \$203.398.160, como capital, más los intereses moratorios causados sobre la misma, a la tasa máxima legal permitida, desde el día siguiente al incumplimiento hasta que fuera realizado el pago total de dicha obligación.

1.2. MANDAMIENTO EJECUTIVO

El juzgador de primera instancia libró la orden ejecutiva en proveído del 16 de octubre de 2018, por el capital y los intereses moratorios solicitados en el libelo genitor, esto es, desde el 03 de enero de 2018, a la tasa de una y media veces el interés bancario corriente certificado por la Superintendencia Financiera para cada período (Fol. 20, Cdno. Ppal.).

1.3 EXCEPCIONES PROPUESTAS POR LA DEMANDADA.

Una vez notificado el ejecutado de la orden de apremio, dentro del término legal propuso las excepciones que denominó (Fol. 23 a 85, Cdno. Ppal):

1.3.1. Inexistencia del negocio causal o subyacente. Argumentando que la letra de cambio arrimada a la demanda, si bien había sido firmada por el demandado, se había hecho con espacios en blanco, pues solo se suscribió el nombre del girado, el valor

del importe y se firmó con huella, quedando pendiente de diligenciar la fecha de creación y vencimiento, además del beneficiario del mismo.

Adujo que dicho título se consintió como garantía de la obligación que le adeudaba a la señora SANDRA MILENA RINCÓN GARCÍA, y que se encuentra relacionada en el documento denominado “Reconocimiento de Deuda y Obligación de Pago No. 1”.

No obstante, se advierte que en la letra de cambio aportada figura como beneficiaria la COOPERATIVA PLAYEROS DE GUATAPÉ COOPLAYEROS, pero coinciden los demás datos diligenciados, pudiendo deducirse que se trata del mismo documento. Sin embargo, aun cuando dicho título obra en favor de la demandante, carece de negocio causal. Además, respecto de la real beneficiaria debe indicarse que se presenta una contravención a las instrucciones dadas para completar los espacios en blanco.

1.3.1.1. Falta de legitimación en la causa por activa. Soportada en los mismos argumentos esbozados para la excepción anterior, pues conforme a lo reseñado, no era la Cooperativa demandante la beneficiaria de la obligación contenida en el instrumento adunado como base de recaudo.

1.3.1.2. Compensación. Expuso que la demandante había adquirido varios créditos en donde el señor Rodimiro Tangarife Cifuentes fue avalista, y dejó de cumplir con los respectivos pagos, los cuales eran consignados en la cuenta de dicha Cooperativa, por lo que la entidad financiera acreedora empezó a debitar dichos valores de la cuenta bancaria del demandado, quien se vio obligado a asumir los montos mensuales establecidos para evitar un proceso ejecutivo, habiendo pagado por este concepto la suma de \$195.565.007, para el momento de presentación de la demanda; por tanto, de admitirse a la ejecutante como legitimada para el cobro de la letra de cambio adunada a la demanda, se deberá a realizar la respectiva compensación por ese monto.

1.4. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Cumplidas las ritualidades propias para esta clase de asuntos, conforme las previsiones de los artículos 372 y 373 del Código General del Proceso, el JUZGADO DOCE CIVIL DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN, en audiencia llevada a cabo el 26 de

julio de 2019, profirió la decisión que selló la primera instancia, ordenando cesar la ejecución, por hacerse contrariado las instrucciones dadas para llenar los espacios en blanco de la letra adunada a la demanda, y no ser el ejecutante el acreedor establecido en las mismas (Fol. 121 a 125 y CD Fol. 126, Cdnó. 1).

1.5. APELACIÓN Y ALEGACIONES EN SEGUNDA INSTANCIA.

En el mismo acto de la audiencia el abogado de la parte demandante formuló recurso de apelación en contra de la sentencia, sustentando el mismo dentro del término de que trata el inciso 2° del numeral 3° del artículo 322 del Código General del Proceso, arguyendo que dicha decisión incurrió en un defecto fáctico al valorar el documento denominado “Reconocimiento de deuda y obligación No. 1°”, de manera equivocada en su cláusula cuarta, dejando de interpretar la simultaneidad de éste con la letra de cambio aportada.

Además, precisó que en el referido documento no se había especificado, cuáles eran los espacios en blanco que se debían completar, si es que se pudiera considerar que aquél tenía la calidad de carta de instrucciones, la cual realmente considera no era viable, por no haber una manifestación expresa y detallada de la forma de llenado de la letra de cambio; y ni siquiera haberse determinado dentro del acervo probatorio los espacios que habían quedado en blanco para el momento de su suscripción.

De otro lado, argumentó que la señora Sandra Milena Rincón García, quien es la representante legal de la Cooperativa, había puesto a esta entidad como beneficiaria para proteger sus intereses, en razón a la posición dominante que ejercía el demandado por aquélla, pues era quien ordenaba los gastos de dicho ente cooperativo, circunstancia que hábilmente pretendió desviar el accionado en el interrogatorio que le fue practicado.

Finalmente, expone que la Cooperativa estaba legitimada, debido a que la letra de cambio se había firmado por el demandado por exigencia de la representante legal, ante la desvinculación de éste de dicha entidad, para que respaldara las obligaciones adquiridas por aquél, en aras de evitar que tuvieran que ser asumidas por ella.

2. CONSIDERACIONES.

2.1. PRESUPUESTOS PROCESALES. Revisada la actuación cumplida no se observa impedimento alguno para proferir sentencia de mérito, pues la demanda reúne los requisitos legales, su trámite se ha cumplido con sujeción al rito del proceso ejecutivo singular, ante juez competente, y están demostradas la capacidad para ser parte, para comparecer al plenario, así como el interés para obrar, tanto por activa como por pasiva. Además, no se advierte configurado algún vicio que afecte la validez del trámite, ni motivo para que el Tribunal se abstenga de resolver.

2.2. PROCESOS EJECUTIVOS. Por sabido se tiene que el litigio del tenor que nos ocupa reclama la existencia de una obligación clara, expresa y exigible que conste, entre otros, en un documento proveniente del deudor o de su causante y que constituya plena prueba en contra de él, siendo esa la razón para que con la demanda deba allegarse un documento de la condición anotada, ello según lo previene el art. 422 del C: G. del P. Por lo que, cualquier hecho que tienda a desconocer la existencia o exigibilidad de dicha obligación debe alegarlo y probarlo el ejecutado según lo reglado en el artículo 167 del C.G.P.

En el caso *sub-examine*, para invocar la ejecución se presentó una letra de cambio, sin reparos frente a los requisitos formales que se exigen y que, si bien reconoció el demandado haber suscrito, arguyó no haberse llenado los espacios en blanco que se dejaron en el momento de imponer su rúbrica en la misma, en la forma acordada en el documento suscrito entre las mismas partes, y arrimado a la contestación, denominado “Reconocimiento de deuda y obligación No. 1”.

2.3. LA APELACIÓN. La parte demandante, ante la prosperidad de la excepción propuesta por el demandado denominada “falta de legitimación en la causa”, que conllevó a cesar la ejecución, promovió dentro de la oportunidad legalmente establecida el recurso de apelación, fundamentado en la improcedencia de tener el documento antes citado como carta de instrucciones respecto del llenado de los espacios en blanco de la letra de cambio allegada para el cobro ejecutivo.

Al tenor de lo establecido en el artículo 622 del Código de Comercio, es procedente la suscripción de un título valor en blanco o con espacios en blanco, pudiendo en estos casos:

*“...cualquier tenedor legítimo...llenarlos, **conforme a las instrucciones del suscriptor** que los haya dejado, antes de presentar el título para el ejercicio del derecho que en él se incorpora.”*

Es decir, que el tenedor legítimo del título, se encuentra sujeto a las indicaciones dadas por quien se obliga a través de su firma en un documento en blanco o con espacios en blanco, para redactar el contenido del mismo, o en su defecto, completar los espacios que hayan quedado pendientes de diligenciar.

Ahora, no es necesario que expresamente se indique por el deudor que las instrucciones son para tal efecto, o que deje plasmada tal intención por escrito, pues se entiende que tales instrucciones se corresponden con las condiciones propias de la obligación que originó el respectivo título, en cuanto a su monto, plazo, intereses, en caso de haberse establecido, y demás aspectos que deba contener ese documento.

Es así que la jurisprudencia y la doctrina, ya ha admitido que a pesar de aludirse o referirse comúnmente a una “carta de instrucciones”, éstas no necesariamente son escritas, ya que pueden darse de manera verbal, pero además se ha considerado que las indicaciones de no emitirse como tal, es decir, de no dejarse o manifestarse expresamente que se deben llenar los espacios en blanco de determinada manera, los mismos deben diligenciarse conforme a las particularidades que rodearon el negocio que los originó, esto es, al acuerdo que medio entre las partes para su suscripción.

Al respecto ha señalado la jurisprudencia:

“...la carta de instrucciones puede constar en un documento escrito o de manera verbal, al no existir una norma que exija alguna formalidad.

(...)

En conclusión, los títulos ejecutivos que se suscriban en blanco, pueden llenarse sus espacios conforme a la carta de instrucciones. No obstante, cuando el suscriptor del título alegue que no se llenó de acuerdo a las instrucciones convenidas, recae en él la obligación de demostrar que el tenedor complementó los espacios en blanco de manera arbitraria y distinta a las condiciones que se pactaron.

“Se puede deducir, entonces, que el título valor suscrito en blanco deberá ser diligenciado de acuerdo con las instrucciones escritas o verbales que acordaron las partes. Ahora bien, si posteriormente el título es negociado, deberá llenarse previamente por el primer tenedor teniendo en cuenta las autorizaciones dadas, a fin de que el siguiente tenedor lo pueda hacer valer, ...que sí [tiene] conocimiento de lo convenido con la deudora...”

Ahora, en este caso, quedó acreditado con el documento aportado por el demandado con el escrito de excepciones, suscrito por él y la señora SANDRA MILENA RINCÓN GARCÍA, denominado “Reconocimiento de deuda y obligación de pago”, que habían plasmado las condiciones de la obligación que aquél le adeudaba a ésta, y que, como garantía del pago, en el caso de no hacerse de manera voluntaria sería firmada una letra de cambio, por el valor allí señalado, esto es, \$203.398.160, que se corresponde con la adunada para el cobro; por lo cual puede colegirse que la letra referenciada en el documento citado es la misma que se arrimó a la demanda.

Aunado a lo anterior, quedó acreditada tal circunstancia con el interrogatorio practicado a la representante legal de la Cooperativa demandante, señora SANDRA MILENA RINCÓN GARCÍA, por lo que establecido que la letra fue firmada por el demandado en atención a lo estipulado en el documento en cuestión, los espacios en blanco que se habían dejado por el deudor debieron sujetarse a las condiciones obligacionales contenidas en el mismo, aun cuando la finalidad de firmar ese documento no fuera la de diligenciar esos espacios, ni se hubiese indicado de manera expresa tal circunstancia, pues como viene de señalarse, aún en la ausencia de manifestación expresa del deudor en tal sentido, el título debe ser completado conforme a los términos en que se obligó el deudor.

Así las cosas, habiéndose comprometido el deudor con la señora Rincón García, como persona natural, el llenar el espacio destinado al acreedor o beneficiario de la obligación incorporada en la letra de cambio allegada como base de recaudo con el

nombre de la COOPERATIVA DE PLAYEROS DE GUATAPÉ, estaba en contravía de lo convenido.

Ahora, como lo señaló el *a quo*, en estos casos, lo que procede es ajustar el título a las condiciones del negocio que originó la suscripción del título, que en este caso implicaba tener como acreedora a la señora SANDRA MILENA RINCÓN GARCÍA, generando indefectiblemente la falta de legitimación en la causa por activa de la Cooperativa demandante.

3. CONCLUSIÓN.

Conforme lo analizado precedentemente, no hay lugar a variar la decisión de primera instancia, en la medida que los reparos expuestos por la parte apelante, no tuvieron la fuerza suficiente para derruir los fundamentos en los que se edificó la decisión del juez *a quo*. En consecuencia, se confirmará la sentencia apelada.

Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, en Sala Tercera de Decisión Civil, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

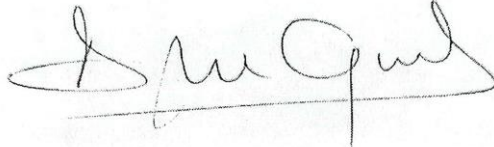
FALLA:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida por el JUZGADO DOCE CIVIL DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN, el 26 de julio de 2019, dentro del proceso EJECUTIVO singular instaurado por la COOPERATIVA PLAYEROS DE GUATAPÉ “COOPLAYEROS”, en contra del señor RODIMIRO TANGARIFE CIFUENTES, conforme lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: CONDENAR a la parte demandante al pago de las costas causadas en esta instancia, por serle desfavorable la apelación promovida. Como agencias en derecho se fija la suma equivalente a UN (1) SALARIO MÍNIMO LEGAL MENSUAL VIGENTE, esto es, UN MILLÓN TRESCIENTOS MIL SEISCIENTOS SEIS PESOS MIL (\$1.300.606).

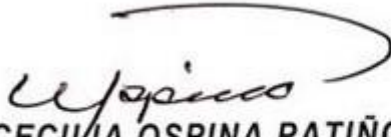
TERCERO: Ejecutoriada la presente decisión, devuélvase el expediente híbrido a su lugar de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.



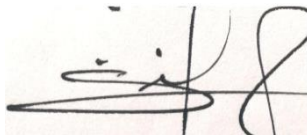
ALBA LUCÍA GOYENECHÉ GUEVARA
Magistrada

Firma escaneada exclusiva para decisiones de la Sala Tercera de Decisión Civil del Tribunal Superior de Medellín, conforme el artículo 105 del Código General del Proceso, en concordancia con las disposiciones de la Ley 2213 de 2022



MARTHA CECILIA OSPINA PATIÑO
Magistrada

Firma escaneada exclusiva para decisiones de la Sala Tercera de Decisión Civil Tribunal Superior de Medellín, conforme el artículo 105 del Código General del Proceso, en concordancia con las disposiciones de la Ley 2213 de 2022



(Firma escaneada exclusiva para decisiones de la Sala Tercera de Decisión Tribunal Superior de Medellín, conforme el artículo 105 del Código General del Proceso, en concordancia con las disposiciones de la Ley 2213 de 2022)

JOSE GILDARDO RAMÍREZ GIRALDO
Magistrado